



Tema 95 del programa*: Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión**

INDICE

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título</i>	<i>Página</i>
A/9411	Informe de la Sexta Comisión	1
Decisión adoptada por la Asamblea General		8
Lista de documentos		8

* Para las actas de las sesiones relativas a este tema, véase: Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 1439a. a 1445a.; e *ibid.*, Sesiones Plenarias, 2197a. sesión.

** Desde 1968, la Asamblea General ha examinado los informes de este Comité en los períodos de sesiones vigésimo tercero (tema 86 del programa), vigésimo cuarto (tema 88 del programa), vigésimo quinto (tema 87 del programa), vigésimo sexto (tema 89 del programa) y vigésimo séptimo (tema 88 del programa).

DOCUMENTO A/9411*

Informe de la Sexta Comisión

*Original: francés
10 de diciembre de 1973*

INDICE

	<i>Párrafos</i>
I. Introducción	1-4
II. Propuestas	5-6
III. Debate	7-31
A. Opiniones expresadas sobre determinadas cuestiones preliminares relacionadas con el mandato del Comité Especial, la marcha de sus trabajos y sus métodos de trabajo	7-8
B. Opiniones expresadas sobre determinados aspectos generales de la cuestión de la definición de la agresión	9-10
C. Opiniones expresadas sobre el texto refundido del proyecto de definición contenido en el apéndice A del anexo II del informe del Comité Especial sobre su período de sesiones de 1973	11-31
1. Preámbulo	11
2. Definición general de la agresión (artículo 1)	12-14
3. Cuestiones de anterioridad y de intención agresiva (artículo 2)	15-18
4. Actos cuya inclusión se propuso (artículo 3)	19-24
5. Disposición sobre el carácter no exhaustivo de la lista y sobre los incidentes de menor importancia (artículo 4)	25
6. El derecho de los pueblos a la libre determinación (artículo 5)	26-28
7. Consecuencias jurídicas de la agresión (artículo 6)	29-30
8. Usos lícitos de la fuerza, incluida la cuestión de la centralización (artículo 7)	31
IV. Votación	32
Recomendación de la Sexta Comisión	33

I. Introducción

1. En cumplimiento de la resolución 2967 (XXVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1972, el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión se reunió en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra del 25 de abril al 30 de mayo de 1973 para reanudar su labor de conformidad con la resolución 2330 (XXII), aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1967, y preparó un informe sobre los trabajos realizados en su período de sesiones en 1973 (A/9019 y corrección).

2. En su 2123a. sesión plenaria, celebrada el 21 de septiembre de 1973, la Asamblea General decidió incluir en el programa de su vigésimo octavo período de sesiones el tema titulado "Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión", que remitió a la Sexta Comisión para que lo examinara e informara al respecto.

3. La Sexta Comisión examinó este tema del programa en sus sesiones 1439a. a 1445a., celebradas entre el 15 y el 23 de noviembre de 1973. En la 1439a. sesión, celebrada el 15 de noviembre, el Sr. M. Karasimeonov, representante de Bulgaria y Relator del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión, presentó el informe del Comité.

4. En su 1444a. sesión, celebrada el 21 de noviembre, la Sexta Comisión decidió que su informe sobre este tema del programa contendría un resumen de las principales tendencias de carácter jurídico evidenciadas en el debate, habiéndose señalado previamente a su atención las consecuencias financieras de tal resumen, de conformidad con la resolución 2292

* En el que se incorpora el documento A/9411/Corr.1.

(XXII) de la Asamblea General. Se acordó también que el Secretario General enviaría al Comité Especial las actas de los debates celebrados en el vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General acerca del informe del Comité sobre los trabajos de su período de sesiones de 1973.

II. Propuestas

5. En la 1441a. sesión, celebrada el 19 de noviembre, el representante de Guyana presentó un proyecto de resolución (A/C.6/L.957) patrocinado por los Estados que siguen: Australia, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Ecuador, Ghana, Guyana, Haití, Indonesia, Jamaica, México, Rumania, Uruguay, Yugoslavia y Zambia, a los que se sumaron posteriormente los siguientes: Austria, Canadá, Egipto, Gabón, Guinea, India, Irán, Liberia, Madagascar, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Panamá, República Democrática Alemana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Senegal, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La parte dispositiva del proyecto de resolución estaba redactada como sigue:

“La Asamblea General,

“... ”

“1. Decide que el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión reanude su labor, de conformidad con la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, a comienzos de 1974 en . . . , con el fin de completar sus trabajos y presentar a la Asamblea General, en su vigésimo noveno período de sesiones, un proyecto de definición de la agresión;

“2. Pide al Secretario General que proporcione al Comité Especial los medios y servicios necesarios;

“3. Decide incluir en el programa provisional de su vigésimo noveno período de sesiones el tema titulado ‘Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión’.”

6. En la 1442a. sesión, celebrada el 20 de noviembre, la delegación de Kenia, a la cual se sumó posteriormente la del Canadá, presentó una enmienda (A/C.6/L.958) — que fue retirada en la 1445a. sesión, celebrada el 23 de noviembre — tendente a que el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se redactase como sigue:

“1. Decide que el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión reanude su labor, de conformidad con la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, a comienzos de 1974 en Nueva York, con el fin de completar sus trabajos y presentar a la Asamblea General, en su vigésimo noveno período de sesiones, un proyecto de definición de la agresión;”

III. Debate

A. Opiniones expresadas sobre determinadas cuestiones preliminares relacionadas con el mandato del Comité Especial, la marcha de sus trabajos y sus métodos de trabajo

7. Todos los representantes que hicieron uso de la palabra apoyaron la resolución por la cual el Comité Especial recomendaba a la Asamblea General que lo invitara a reanudar su labor en 1974. Hicieron presente

que el Comité Especial había realizado importantes progresos en su último período de sesiones, y estimaron que en su próximo período de sesiones estaría en situación de elaborar un proyecto de definición de la agresión que gozara de aceptación general. A este respecto, se hizo referencia al informe del Comité Especial sobre la labor realizada en su período de sesiones de 1973, particularmente al párrafo 12 de dicho documento, que hace constar una mejora sensible del ambiente y una voluntad mucho más viva de parte de las delegaciones en la búsqueda de una definición generalmente aceptable de la agresión. Se observó que en ese período de sesiones el Comité Especial había logrado por primera vez elaborar, sobre la base de los tres proyectos de definición principales que le habían sido presentados en su período de sesiones de 1969¹, un proyecto de texto refundido, que comprendía un preámbulo detallado y una parte dispositiva compuesta de diversos artículos; por primera vez, el Comité Especial había podido llegar a un acuerdo o a un acercamiento de opiniones respecto de varias cuestiones importantes; nunca antes había estado tan próximo a elaborar una definición ampliamente aceptable. Se dijo que aunque el proyecto de texto refundido no había sido aún objeto de un consenso, constituía, sin embargo, un documento de trabajo básico generalmente aceptable para la elaboración de una definición de la agresión. Sin perjuicio de apoyar la idea, generalmente compartida por las delegaciones, de que se debería invitar al Comité Especial a celebrar un nuevo período de sesiones en 1974, se señaló que era preciso considerar ese período de sesiones como el último y que las delegaciones que en él participasen lo hiciesen con la voluntad firme de llegar a una definición de la agresión.

8. En lo referente a los métodos de trabajo aplicados por el Comité Especial en su último período de sesiones, varios representantes observaron que esos métodos parecían ser los más aptos para conducir a resultados constructivos. Se dijo al respecto que el hecho de que el Comité hubiese podido elaborar un proyecto de definición refundido se debía en gran parte al método de consultas y negociaciones officiosas, que permitía intercambios de opinión más libres y más amplios de lo que habría sido posible en sesiones oficiales. Igualmente, se subrayó la importancia del método de recurrir a la creación de un grupo de trabajo officioso y de grupos de contacto.

B. Opiniones expresadas sobre determinados aspectos generales de la cuestión de la definición de la agresión

9. Varios representantes pusieron de relieve la importancia de una definición de la agresión. Se señaló al respecto que una definición generalmente aceptable de la agresión sería de suma importancia para los pueblos del mundo y facilitaría considerablemente la tarea de determinar los actos de agresión. Tal definición no sólo sería útil para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, sino que también contribuiría a unificar y reforzar el mecanismo de seguridad en el mundo y favorecería la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Por cierto, una definición no impediría milagrosamente los actos de agresión, pero sin duda contendría a posibles

¹ Véase: Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento No. 20, párrs. 9 a 11.

agresores. Se señaló, por otra parte, que la prevención de las guerras de agresión y el mantenimiento de la paz mundial eran dos preocupaciones profundas de todos los pueblos, por lo que deberían hallarse en la base misma de los trabajos del Comité Especial. No obstante, y sin desmerecer la idea de que el Comité Especial debería proseguir sus esfuerzos con miras a la elaboración de una definición de la agresión, se dijo que era dudoso que la definición pudiese contener a los posibles agresores, simplificar la determinación de los actos de agresión y la aplicación de medidas destinadas a poner fin a esos actos, y facilitar la protección de los derechos e intereses legítimos de la víctima y la prestación de ayuda a la misma. Tal definición no sería particularmente útil en razón del bien conocido oportunismo que caracterizaba las actividades de los órganos de las Naciones Unidas encargados de determinar casos concretos de agresión. No había sido sin razón que la Conferencia de San Francisco había decidido no tratar de definir el concepto de agresión.

10. Con respecto al procedimiento que se debía aplicar para aprobar una definición de la agresión, varios representantes indicaron que, dada la extrema importancia de tal definición y la gran complejidad de algunos de los problemas que planteaba, era absolutamente esencial que se llegara a un acuerdo sobre su texto por la vía del consenso. Se afirmó que no se podía llegar a una definición aceptable y viable de la agresión sometiendo a votación los textos, sino únicamente adoptando decisiones por consenso, habida cuenta de los intereses de todos los grupos de Estados. Era importante que la definición fuese objeto de un acuerdo general si se quería que se la considerase como expresión indiscutible de la opinión de la comunidad internacional y que pudiese inscribirse en el movimiento tendente al reconocimiento universal de los principios del derecho internacional. Igualmente, se expresó la opinión de que convenía más llegar por el momento a una transacción moderada que proseguir las deliberaciones sobre una definición de alcance general; un consenso limitado podría dar paso a la prosecución de los esfuerzos encaminados a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional en importantes esferas. Se dijo, además, que el instrumento que contuviese la definición de la agresión debería revestir la forma de una resolución de la Asamblea General, como se había hecho en el caso de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV), anexo) y de la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional (resolución 2734 (XXV)).

C. Opiniones expresadas sobre el texto refundido del proyecto de definición contenido en el apéndice A del anexo II del informe del Comité Especial sobre su período de sesiones de 1973

1. Preámbulo

11. Varios representantes expresaron la opinión de que el preámbulo del proyecto de texto refundido constituía, en términos generales, una transacción equitativa, bien equilibrada y formulada de manera satisfactoria tanto desde el punto de vista político como desde el jurídico. Se dijo que este preámbulo, que pare-

cía haber sido aceptado en general por el Comité Especial, requeriría leves revisiones, especialmente si el Comité Especial decidía resolver pequeñas diferencias de opinión insertando en el preámbulo disposiciones relativas a las cuestiones correspondientes. Se señaló que los párrafos primero y tercero del preámbulo se apartaban en algunos aspectos de la terminología de la Carta; el texto de la definición no debería entrañar, ni directa ni indirectamente, una enmienda subrepticia a la Carta introducida en forma incompatible con las disposiciones pertinentes de esta misma; el Comité Especial debía prestar especial atención a este punto. En cuanto al sexto párrafo del preámbulo, se expresó la opinión de que el deber de los Estados de abstenerse de hacer uso de la fuerza armada para privar a los pueblos de su derecho a la libre determinación, libertad e independencia se debía extender a todas las formas del uso de la fuerza y que el principio de la integridad territorial se debía mencionar en dicho párrafo. En consecuencia, se propuso que esta disposición se redactase como sigue: "Reafirmando el deber de los Estados de abstenerse de hacer uso de la fuerza para privar a los pueblos de su derecho a la libre determinación, libertad e independencia o para amenazar la integridad territorial de cualquier otro Estado". Asimismo, se sugirió que la Declaración sobre las relaciones de amistad y la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional se mencionasen expresamente en un párrafo del preámbulo.

2. Definición general de la agresión (artículo 1)

12. Varios representantes consideraron aceptable en general la definición general de la agresión enunciada en el artículo 1 del proyecto de texto refundido. Algunos representantes expresaron dudas en cuanto a la conveniencia de incluir en él las palabras "de cualquier manera que se ejerza", que aparecían entre corchetes. Según ellos, deberían suprimirse esas palabras, pues algunos actos que constituían un quebrantamiento de la paz internacional no eran necesariamente actos de agresión. La retención de esas palabras produciría el efecto de dar al concepto de agresión una interpretación excesivamente amplia que no correspondía a la Carta. Habida cuenta de que el principio general enunciado en el artículo 1 era aclarado en los artículos siguientes, las palabras que aparecían entre corchetes eran superfluas y podían ocasionar errores de interpretación; para lograr una definición general lo más clara posible, convendría suprimir esas palabras. En cambio, otros representantes opinaron que la definición general no debía limitarse al uso de la fuerza armada sino incluir todas las formas de uso de la fuerza a que pudiera recurrirse contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado. En consecuencia, se sugirió suprimir en la definición general, después de "fuerza", la palabra "armada" y retener la frase "de cualquier manera que se ejerza".

13. Algunos representantes se declararon partidarios de retener la palabra "soberanía" que figuraba en el texto de la definición general. Se indicó que la soberanía era un elemento esencial del concepto de Estado, que sería objeto, como tal, de violaciones flagrantes en caso de injerencia de las fuerzas armadas de otro Estado. Para los pequeños países era especialmente importante que ese elemento figurara entre los atributos que podían ser violados con un acto de agresión. La opinión de que la "integridad territorial"

y la “independencia política”, mencionadas en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, coincidían con el concepto de soberanía debía ser rechazada; por otra parte, “integridad territorial” e “independencia política” aparecían como conceptos restrictivos, habida cuenta de la experiencia adquirida desde la aprobación de la Carta; por otra parte, no había que olvidar que el párrafo 1 del Artículo 2 de la Carta constituía una aplicación del concepto de soberanía. En cuanto a la expresión “incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, que aparecía en el texto de la definición general, se dijo que tenía el mérito de ser concisa y que no parecía que, con mencionar los “principios y propósitos” o los “principios y las disposiciones” de la Carta, se aclararía más ese texto.

14. Según algunos representantes, convendría formular más explícitamente el concepto de territorio para abarcar sin ambigüedad las “aguas territoriales” y el “espacio aéreo”. Otros representantes estimaban que la expresión “integridad territorial” comprendía esos dos conceptos y que, por consiguiente, no era necesario mencionarlos expresamente en el texto. Por otra parte, algunos representantes sostuvieron que el concepto de “grupo de Estados”, mencionado en el inciso b) de la nota explicativa que acompañaba el artículo 1, no tenía relación con la definición de la agresión. Se señaló que en derecho internacional un Estado era el único responsable de sus actos y no se le podía hacer responsable de los actos de otro Estado. El concepto de culpabilidad o responsabilidad colectivas de un grupo de Estados era ajeno al derecho internacional y podría plantear algunas cuestiones complicadas en cuanto a saber quién decidiría, y de qué manera, si un Estado pertenecía a un grupo de Estados. La cuestión decisiva que había que solucionar para determinar si se había producido una agresión era saber si el Estado de que se trataba había cometido ciertos actos que debían ser considerados actos de agresión en virtud de los artículos 2, 3 y 4 del proyecto de definición. En consecuencia, no estaba justificado el concepto de “grupo de Estados” en el contexto de una definición de la agresión.

3. Cuestiones de anterioridad y de intención agresiva (artículo 2)

15. Varios representantes expresaron la opinión de que el texto del artículo 2 constituía una transacción, que establecía un equilibrio prudencial entre el principio de anterioridad y la intención agresiva. Se señaló que en ese artículo sólo se consideraba la anterioridad como una “presunción” de acto de agresión, y la intención agresiva como un elemento subsidiario. No obstante, no había que olvidar que, en realidad, el Consejo de Seguridad debería tener en cuenta todos los elementos en cada caso particular para determinar si se trataba de un acto de agresión. Se agregó que las disposiciones de ese artículo deberían ser objeto de aceptación general. Se dijo además que la importancia del artículo 2 se debía especialmente a que reconocía el derecho de todo Estado a utilizar la fuerza una vez que se hubiera cometido un acto de agresión; sin embargo, sin ánimo de poner en tela de juicio la competencia del Consejo de Seguridad, debería precisarse ese artículo agregando una frase del tenor siguiente: “Ninguna consideración relativa a la política nacional o exterior de un Estado podrá justificar el empleo de la fuerza armada contra ese Estado por cualquier Estado o grupo de Estados”.

16. A juicio de algunos representantes, el principio de la anterioridad no podía por sí solo bastar para determinar la existencia de un acto de agresión y debía combinarse con el criterio de la intención agresiva. Con arreglo a las disposiciones de la Carta, había circunstancias en las que el uso de la fuerza armada era lícito. La definición debería hacerse de manera que no pudiera ser utilizada para convertir en ilícito lo que estaba permitido en virtud de la Carta y el derecho internacional general. Se señaló que, indudablemente, se habían logrado importantes progresos en cuanto a las cuestiones complejas de la anterioridad y la intención agresiva. Con todo, en el artículo 2 del texto refundido se insistía demasiado en el elemento de la anterioridad. Si ese artículo reconocía actualmente en cierta medida que la determinación de la existencia de un acto de agresión sólo podía hacerse a la luz de todas las circunstancias pertinentes, se podía perfeccionar aún más su texto redactándolo en forma que permitiera establecer el equilibrio apetecido entre el uso, en primer lugar, de la fuerza armada y las muchas otras circunstancias, incluida la intención, que debían tenerse en cuenta. A ese respecto cabía hacer una distinción entre una violación del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta y la determinación de la existencia de un acto de agresión en virtud del Artículo 39: ambos engendraban responsabilidad internacional pero la función y el propósito del Artículo 39 diferían mucho de los del Artículo 2; y oscurecer esa distinción sólo podía llevar a confusiones.

17. En cambio, a juicio de varios representantes el principio de anterioridad debía por sí solo bastar para establecer una presunción de agresión. Para ser aceptable, una formulación de ese principio debía permitir indicar inequívocamente que cualquier Estado que utilizara la fuerza en primer lugar debía ser considerado como autor de un acto de agresión (a reserva de la cláusula de incidentes de menor importancia) y que ello justificaba el derecho de legítima defensa previsto en el Artículo 51 de la Carta. Tal formulación debía asimismo permitir al Consejo de Seguridad negarse a calificar tal acto como agresión, habida cuenta de los poderes que le confería la Carta. Pero si no se sometía la cuestión al Consejo de Seguridad o si éste no podía tomar una decisión, se presumiría que la existencia objetiva de un acto de agresión era consecuencia del uso de la fuerza armada por el Estado que la había empleado en primer lugar. Con referencia al artículo 2 del texto refundido se declaró que, para favorecer un acuerdo general sobre su contenido, cabía aceptar hacer referencia en él al concepto de intención agresiva, no como elemento constitutivo de la infracción sino como una de las circunstancias que el Consejo de Seguridad podía utilizar para calificar tal acto de acto de agresión, o para negarse a hacerlo. Se señaló que, por consiguiente, si el artículo 2 era aceptable en cuanto al fondo, era necesario volver a examinar la formulación y esforzarse por perfeccionarla utilizando dos frases diferentes que permitieran distinguir por una parte la existencia objetiva de un acto de agresión por aplicación de la norma de la anterioridad y, por otra, la facultad del Consejo de Seguridad de volver a examinar esa calificación a priori. Por otra parte, debía suprimirse la expresión “en contravención de la Carta” en la medida en que daba a entender que no sería agresión cualquier uso de la fuerza armada que no fuera contrario a la Carta. Se dijo también que para eliminar una de las deficien-

cias que entrañaba el texto del artículo 2 podrían reemplazarse las palabras “en contravención de la Carta” por “según se enuncia en la presente definición”, o incluir en el texto una referencia al artículo 3 (Actos cuya inclusión se propuso).

18. Algunos representantes afirmaron que no era necesario incluir, entre las circunstancias que el Consejo de Seguridad podría tener en cuenta para determinar si un Estado había cometido una agresión, “los propósitos de los Estados interesados”. Se dijo que al retener la intención agresiva como criterio para calificar un acto de agresión, se servirían inevitablemente los intereses de los agresores y no se protegerían los intereses de las víctimas de la agresión. Si bien la intención era un elemento subjetivo, se manifestaba por un acto concreto de agresión. Así, pues, para determinar si un acto determinado constituía una agresión y si el Estado de que se trataba tenía una intención agresiva había que basarse en un hecho objetivo, y no se podía admitir en absoluto la posibilidad de proceder en dirección inversa, es decir, la posibilidad de determinar la existencia de un acto de agresión fundándose en la prueba de una intención agresiva. Para excluir de la definición el concepto de intención, se sugirió el siguiente texto para el artículo 2: “El primer uso de la fuerza armada por un Estado constituirá una presunción de acto de agresión; no obstante, el Consejo de Seguridad podrá decidir que una determinación en ese sentido no está justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión”.

4. Actos cuya inclusión se propuso (artículo 3)

19. La lista de los actos a que se refería el artículo 3 del texto refundido fue considerada en gran parte, y en principio, aceptable por varios representantes. Se señaló que el hecho de que hubiera casi un consenso sobre esa lista se debía especialmente al acuerdo que existía con respecto al artículo 4 sobre el carácter no exhaustivo de la lista y los incidentes de menor importancia. En cuanto a las palabras “independientemente de que haya o no declaración de guerra” que aparecían en el párrafo introductorio del artículo 3, se manifestó que colocaban la cuestión en una perspectiva apropiada, estaban acordes con el espíritu y la letra de la Carta y respondían a las realidades del mundo contemporáneo; si se modificara el texto de esa introducción, sería sumamente conveniente retener esa idea en forma apropiada.

20. En cuanto al inciso b) del artículo 3, se propuso incluir en él una referencia expresa a las armas de destrucción masiva. Con respecto a la palabra “bloqueo” que aparecía en el inciso c), se sostuvo que en ese contexto no podía referirse al concepto formal del bloqueo, tal como se establece en la Declaración de París de 1856²; esta clase de bloqueo ya no se practicaba de hecho, por lo que no se podía dar carácter de actualidad a ese término excepto aplicándolo al bloqueo directo o indirecto, independientemente de su forma o alcance, es decir no sólo al bloqueo en el sentido tradicional sino también a todas las formas de guerra económica, boicoteo y bloqueo, fuere cual fuese el nombre con que se designaran. Por

otra parte, se expresaron dudas acerca de la conveniencia de retener en el inciso d) las palabras “o contra su flota mercante o aérea”, que podrían dar a los países que dispusieran de barcos de pesca dotados de equipo moderno la libertad de penetrar a voluntad en los recursos marinos de las naciones menos adelantadas, que se verían entonces privadas del derecho a defenderse. En cambio, se sostuvo que debían retenerse esas palabras para tener en cuenta el caso en que la supervivencia económica de un país dependiera de su comercio exterior y en que un ataque contra su marina mercante pudiera ser fatal. Se precisó que la expresión “o contra su flota mercante o aérea” demostraba además que debía tratarse de un ataque masivo y no de actos aislados.

21. En cuanto al inciso e) del artículo 3, se señaló que no revelaba ninguna característica nueva de un acto de agresión; el caso que preveía ya estaba totalmente contemplado en las disposiciones del inciso a) del mismo artículo. Respecto del inciso f), se manifestó que si se interpretaba en forma literal, la responsabilidad de la agresión incumbiría exclusivamente al Estado que hubiera puesto su territorio a disposición de otro Estado. Se afirmó que un Estado que hubiera aceptado la presencia en su territorio de fuerzas armadas de otro Estado no debería ser considerado responsable de los actos de este último, si no estaba en condiciones de oponerse a ellos; en otras palabras, para ser considerado un agresor, el Estado receptor debía convertirse voluntariamente en cómplice, circunstancia que se indicaba en el texto de ese inciso al hablar de “el asentimiento y acuerdo” de ese Estado. Se indicó también que el inciso f) no debía tender de manera alguna a atentar contra el derecho de los pueblos a luchar por la libre determinación.

22. En cuanto al inciso g), algunos representantes indicaron que su texto podía conducir a una interpretación amplia en el sentido de que podía considerarse un acto de agresión no sólo el envío de bandas armadas sino también el hecho de prestar asistencia a éstas. Se señaló que en la práctica ello podía dar legitimidad a un ataque preventivo y negar asimismo el derecho generalmente reconocido de ayudar a los movimientos de liberación nacional. La agresión indirecta exigía existencia de un vínculo directo entre el envío de bandas armadas y el Estado que las enviaba y cierto grado de intensidad en las actividades de esas bandas para poder ser equiparada a los demás actos de agresión enumerados en la definición. A juicio de otros representantes, la fórmula contenida en el inciso g) trataba en forma apropiada del uso indirecto de la fuerza. Se precisó que en él se preveía claramente que sólo el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas constituía un acto de agresión, a condición, por supuesto, de que el ataque realizado fuera de una gravedad comparable a la de los actos mencionados en los incisos precedentes; por otra parte, una lectura detenida del inciso g) teniendo presentes las disposiciones del artículo 5, relativo al derecho de los pueblos a la libre determinación, demostraba que ese inciso no atentaba en absoluto contra los movimientos de liberación nacional; por consiguiente, el inciso g) debería aceptarse como una transacción equitativa. Aun declarando la buena disposición, en un afán de llegar a una transacción, a apoyar en principio el texto de ese inciso, se señaló que no se podía admitir la idea de que existiera agresión por el solo hecho de

² Véase: “Colección de Textos Internacionales”, Barcelona, Casa Editorial Bosch, tomo I, pág. 356.

que el Estado receptor hubiera organizado, ayudado a organizar o alentado la formación de bandas armadas, independientemente de la cuestión de saber si había participado también en su envío. No se podía aceptar a fortiori considerar como elemento de la agresión el solo hecho de que el Estado receptor pusiera su territorio a disposición de bandas armadas.

23. Aun congratulándose de que se hubiera puesto la agresión indirecta en un pie de igualdad con la agresión directa, se indicó que la actitud pasiva que era demasiado frecuente respecto de los actos de agresión indirecta y terrorismo podía considerarse que no había sido tratada adecuadamente. La agresión indirecta, que era una de las formas más peligrosas y provocativas que la agresión manifiesta podía asumir, seguía siendo la parte más importante del proyecto de definición sobre la que aún no se había llegado a un consenso. La viabilidad de todo el proyecto dependería de que las deliberaciones sobre esta cuestión tuvieran éxito. Por otra parte, se dijo que, en su forma actual, el inciso g) era demasiado restrictivo. El tenor de su texto debería ser tal que fuera aplicable a un Estado que organizara o alentara desórdenes civiles o actos de terrorismo en el territorio de otro Estado. La Declaración sobre las relaciones de amistad contenía fórmulas útiles y el Comité Especial debería inspirarse en ella para elaborar el texto relativo a la cuestión de la agresión indirecta. Por otra parte, para abarcar los casos de agresión indirecta cometida por bandas armadas de movimientos disidentes organizados y sostenidos por Potencias exteriores, se propuso insertar las palabras "o su apoyo" en el inciso g).

24. Aun reconociendo que la lista de actos que figuraba en el artículo 3 no era limitativa, se señaló que en la definición debería hacerse una referencia concreta a la agresión económica, ya fuera en la lista o en una disposición separada. También se sostuvo que la agresión no tenía que ser necesariamente territorial sino que podía ser también política, como en el caso en que un Estado provocara un golpe de Estado en otro país o realizara una campaña de propaganda internacional contra otro Estado; el Comité Especial debía tener en cuenta este aspecto de la agresión. Por otra parte, se habló de la necesidad de tener presente la agresión cultural.

5. Disposición sobre el carácter no exhaustivo de la lista y sobre los incidentes de menor importancia (artículo 4)

25. Varios representantes expresaron su apoyo al artículo 4. Toda norma que reafirmase y reforzase los vastos poderes del Consejo de Seguridad en la esfera del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales merecía apoyo sin reservas. Este artículo era tanto más necesario por cuanto muchos países estimaban que existían otras formas de expresión. Se observó, por otra parte, que convendría insistir más expresamente en los poderes del Consejo de Seguridad dimanantes del Capítulo VII de la Carta. Se señaló que la investigación sobre la identidad del agresor no era necesariamente el mejor medio de obtener los resultados deseados. Lo más importante era poner en marcha el mecanismo de seguridad colectiva en lugar de atribuir las culpas. Si el Comité Especial adoptaba cualquier otro método, sus trabajos podían conspirar contra la causa de la paz en lugar de hacerla progresar.

En cambio, algunos representantes expresaron serias dudas en cuanto a la oportunidad de incluir en la definición una disposición que otorgase al Consejo de Seguridad el poder absoluto de decidir si un acto dado constituía un acto de agresión. Una definición que incluyese tal disposición carecería de toda utilidad.

6. El derecho de los pueblos a la libre determinación (artículo 5)

26. A juicio de varios representantes, el artículo 5 constituía una disposición esencial de la definición. Incorporaba el principio según el cual la definición de la agresión no debía afectar el derecho de los pueblos a la libre determinación. Los esfuerzos realizados por los pueblos oprimidos para reconquistar su independencia y su territorio nacional y luchar contra la dominación extranjera no podrían considerarse como una forma de agresión. Evidentemente, los actos ejecutados en pro de la realización del derecho a la libre determinación y a la independencia en el marco de la lucha contra la ocupación o la dominación extranjera se relacionaban manifiestamente con el derecho de legítima defensa proclamado en el Artículo 51 de la Carta; estos actos no podían considerarse en ningún caso actos de agresión. También se dijo que el derecho a la libre determinación era un derecho natural reconocido a todos los pueblos por la Carta y por el derecho internacional; toda forma de colonialismo, toda ocupación militar y toda forma de dominación extranjera constituían en sí actos permanentes de agresión que conferían a los pueblos de que se trataba el derecho de legítima defensa. El artículo 5 tenía fundamental importancia, y los principios que en él se enunciaban no debían ser objeto de una simple mención en el preámbulo.

27. Aunque convenían en principio en que la definición debería contener una reafirmación de las disposiciones de la Carta relativas al derecho de los pueblos a la libre determinación, algunos representantes estimaron que este derecho debía ejercerse exclusivamente por medios pacíficos y no violentos. La mención de este derecho no debía surtir el efecto de debilitar la prohibición de la agresión en sentido estricto o la prohibición del uso de la fuerza en sentido amplio. La definición debería estar destinada ante todo a limitar la violencia y no a estimularla y, en todos los casos en que las expresiones empleadas no fuesen perfectamente claras a este respecto, sería necesario modificarlas.

28. Para superar las dificultades con que se había tropezado en la redacción del artículo 5, algunos representantes manifestaron que el Comité Especial debería tratar de ponerse de acuerdo sobre una disposición bien equilibrada y cuidadosamente redactada, inspirándose en la cláusula correspondiente de la Declaración sobre las relaciones de amistad.

7. Consecuencias jurídicas de la agresión (artículo 6)

29. Muchos representantes apoyaron, en principio, las disposiciones del artículo 6, que consideraron como un elemento extremadamente importante de la definición. Con respecto al primer párrafo de este artículo, opinaron que se debería incluir en él, en el espacio entre paréntesis dejado en blanco, la expresión más apropiada para hacer resaltar claramente el principio de que la agresión constituye un "delito" contra la paz internacional que da lugar a responsabilidad en

virtud del derecho internacional. Se hizo observar que el derecho internacional contemporáneo reconoce este principio, que se desprende de numerosos instrumentos internacionales, tales como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg³ y el del Tribunal Militar Internacional de Tokio⁴, cuyos principios básicos han sido unánimemente aprobados. Se dijo que el espacio en blanco en el primer párrafo del artículo 6 debería llenarse con palabras que se inspiraran en el quinto párrafo del preámbulo; cabría igualmente inspirarse en la Declaración sobre las relaciones de amistad. Se sugirió la redacción siguiente para el primer párrafo del artículo 6: "La agresión constituye un delito contra la paz internacional que da lugar a responsabilidad con arreglo al derecho internacional". Se expresó igualmente la opinión de que la agresión, en cualquier forma en que se manifestara, era un crimen de lesa humanidad y debía castigarse en consecuencia. Con respecto al segundo párrafo del artículo 6, se adujo que constituía un corolario natural de la prohibición y la condena de la agresión. Se sostuvo que estaba en consonancia con las disposiciones de la Declaración sobre las relaciones de amistad, así como de la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional, las cuales estipulaban que el territorio de un Estado no podía ser objeto de ocupación militar o de adquisición por otro Estado como consecuencia del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza y que no se reconocería la legalidad de ninguna adquisición territorial obtenida de esta manera; estos principios fundamentales habían sido igualmente reafirmados en numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

30. En cambio, ciertos representantes expresaron serias dudas en cuanto a la necesidad de un artículo sobre las consecuencias jurídicas de la agresión, por lo menos en la forma que se consideraba. Se señaló que no cabía duda alguna de que todo acto de agresión reconocido daba lugar ipso facto a la responsabilidad internacional del Estado de que se trataba. Sin embargo, era muy dudoso que la simple repetición de este truismo pudiera tener alguna utilidad. Este aspecto de las consecuencias jurídicas de la agresión correspondía al derecho de la responsabilidad de los Estados — de cuya codificación se ocupaba actualmente la Comisión de Derecho Internacional — y no a la definición de la agresión. Por otra parte, era por lo menos curioso, y probablemente inadmisibles, que este artículo no mencionara la única consecuencia principal de la agresión citada expresamente en el Artículo 51 de la Carta. Además, se sostuvo que los argumentos expuestos en favor de la inclusión en la definición de disposiciones sobre las consecuencias jurídicas de la agresión no eran convincentes. Tales disposiciones eran, en efecto, superfluas habida cuenta de la abundancia de instrumentos internacionales pertinentes, tales como el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el del Tribunal Militar Internacional de Tokio, las resoluciones de la Asamblea General que confirmaban los principios reconocidos por el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y en el fallo de este Tribunal, así como la Declaración sobre las relaciones de amistad. Igualmente, la disposición sobre la adquisición territorial

complicaba inútilmente el texto, teniendo en cuenta la existencia de disposiciones más precisas al respecto en la mencionada Declaración.

8. Usos lícitos de la fuerza, incluida la cuestión de la centralización (artículo 7)

31. Algunos representantes estimaron que el artículo 7 era satisfactorio. Dado que la Carta constituía uno de los principales instrumentos jurídicos internacionales capaces de servir a la lucha contra las amenazas a la paz, se dijo a este respecto, que sería conveniente incluir en el texto de la definición una disposición en el sentido de este artículo, según la cual todas las disposiciones pertinentes de la Carta deberían tomarse en cuenta en la determinación de los casos de agresión. Se dijo además que cabía recordar que el Artículo 51 de la Carta había sido objeto de interpretaciones divergentes por parte de varios Estados, que habían adoptado actitudes irreconciliables en la materia; en tales condiciones, el artículo 7 debería ser generalmente aceptable. Aunque reconocieron que este artículo restringía acertadamente los usos lícitos de la fuerza a los previstos por las disposiciones pertinentes de la Carta, otros representantes opinaron que la propuesta de ampliar este artículo era en extremo importante; se señaló que había una contradicción interna en la idea de justificación legal de la agresión; todas las formas de agresión, directas o indirectas, flagrantes o solapadas, deberían condenarse, sin ofrecer ninguna posibilidad de justificación a posteriori con argumentos especiosos y falaces. Se dijo también que el artículo 7 debería redactarse de modo que se limitaran los casos del uso de la fuerza por los organismos regionales, lo que pondría fin a la interpretación abusiva del Capítulo VIII de la Carta. La definición no debería contener fórmulas ambiguas que no disiparan las dudas que suscitaba la interpretación de las claras disposiciones del Artículo 53 de la Carta.

IV. Votación

32. En su 1445a. sesión, celebrada el 23 de noviembre, la Sexta Comisión decidió, por 52 votos contra ninguno y 46 abstenciones, que el período de sesiones de 1974 del Comité Especial se celebrara en Nueva York. Por 102 votos contra ninguno, la Sexta Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/L.957, con la adición de la palabra "Nueva York" en el párrafo 1 de la parte dispositiva (véase el párrafo 33 infra).

Recomendación de la Sexta Comisión

33. La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de resolución que sigue:

Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión acerca de la labor realizada en su sexto período de sesiones (A/9019 y corrección), celebrado en Ginebra del 25 de abril al 30 de mayo de 1973,

Tomando nota de los progresos realizados hasta el momento por el Comité Especial en su examen de la

³ Naciones Unidas, "Recueil des Traités", vol. 82, No. 251, pág. 279.

⁴ Véase: "Trial of Japanese War Criminals", United States Government Printing Office, Washington, 1946, pág. 39.

cuestión de la definición de la agresión y en lo relativo al proyecto de definición, según se desprende de su informe,

Convencida de que tales progresos hacen posible, en la práctica, que el Comité Especial elabore en su próximo período de sesiones una definición de la agresión que goce de la aceptación general,

Considerando que el Comité Especial no pudo dar fin a su tarea en su sexto período de sesiones,

Considerando que en sus resoluciones 2330 (XXII) de 18 de diciembre de 1967, 2420 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968, 2549 (XXIV) de 12 de diciembre de 1969, 2644 (XXV) de 25 de noviembre de 1970, 2781 (XXVI) de 3 de diciembre de 1971 y 2967 (XXVII) de 14 de diciembre de 1972, la Asamblea General reconoció que existía el convencimiento general de la necesidad de acelerar la elaboración de una definición de la agresión,

Considerando la urgencia de llevar a feliz término la labor del Comité Especial y la conveniencia de lograr la definición de la agresión lo antes posible,

Tomando nota asimismo del deseo común de los miembros del Comité Especial de proseguir sus trabajos con la necesaria rapidez sobre la base de los resultados logrados y de llegar a un proyecto de definición actuando con un espíritu de comprensión mutua y avenencia,

1. *Decide* que el Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión reanude su labor, de conformidad con la resolución 2330 (XXII) de la Asamblea General, a comienzos de 1974 en Nueva York, con el fin de completar sus trabajos y presentar a la Asamblea General, en su vigésimo noveno período de sesiones, un proyecto de definición de la agresión;

2. *Pide* al Secretario General que proporcione al Comité Especial los medios y servicios necesarios;

3. *Decide* incluir en el programa provisional de su vigésimo noveno período de sesiones el tema titulado "Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión".

DECISION ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

En su 2197a. sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre de 1973, la Asamblea General, por 119 votos contra ninguno, aprobó el proyecto de resolución presentado por la Sexta Comisión (A/9411, párr. 33). Para el texto definitivo, véase: Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 30, resolución 3105 (XXVIII).

LISTA DE DOCUMENTOS

NOTA. La presente lista comprende los documentos mencionados durante el examen del tema 95 del programa que no se reproducen en el fascículo.

<i>Signatura del documento</i>	<i>Título o descripción</i>	<i>Observaciones y referencias</i>
A/9019 y Corr.1	Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión	Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento No. 19 y corrección
A/C.6/L.957	Proyecto de resolución	Para los autores y el texto, véase A/9411, párr. 5
A/C.6/L.958	Enmienda al proyecto de resolución contenido en el documento A/C.6/L.957	Idem., párr. 6
A/C.6/L.960	Consecuencias administrativas y financieras del proyecto de resolución A/C.6/L.957: nota del Secretario General	Mimeografiado